



Juan Eduardo Vargas: “En este Gobierno las universidades privadas no son vistas con buenos ojos”



FOTOGRAFÍA: JONNATHAN OVARZUN/ATON

Mane Cárcamo

Ingeniero comercial con un posgrado en filosofía, Juan Eduardo Vargas (54) asumió en abril como rector de la Universidad Finis Terrae. Allí dice estar “contento, motivado y desafiado”. Antes había sido vicerrector académico de la casa de estudios y hasta marzo de 2022 subsecretario de Educación Superior en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Pero antes de todo eso Vargas tenía una promisoría carrera en el mundo financiero —en LarrainVial— que dejó a un lado para dedicarse a la educación. “En ningún momento volvería el tiempo atrás. Mi paso por LarrainVial fue muy positivo, pero nunca he dudado del paso que di. Al contrario: estoy feliz. Si bien han existido momentos muy difíciles —como mi paso por el Ministerio de Educación, particularmente en el último periodo, cuando nos tocó enfrentar el estallido y la pandemia—, jamás hubo un instante en que dijera: ¿Qué estoy haciendo acá?. Al contrario, pienso que fue lo correcto”, cuenta.

Crítico declarado del proyecto de Financiamiento de Educación Superior (FES, que pretende reemplazar al Crédito con Aval del Estado) y de la postura del Gobierno hacia las universidades privadas, Vargas nunca eleva la voz, pero deja en claro sus discrepancias con la adminis-

“Me indigna es que, con los recursos actuales, se termine afectando a las universidades privadas, especialmente a través de los aranceles regulados”, comenta el exsubsecretario de educación superior sobre el proyecto de Financiamiento de Educación Superior (FES).

tración de Gabriel Boric.

“Hay una cierta animadversión”
 —En la discusión por el FES has sido tal vez de los rectores más críticos, declarando incluso que en este Gobierno “existe una mirada peyorativa respecto al aporte de las universidades privadas”.

—Suelo decir las cosas de frente, pero siempre con respeto. Y lo que observo, con base en hechos concretos, es que sí existe una mirada peyorativa —incluso me atrevería a hablar de cierta animadversión— hacia las universidades privadas. No lo digo desde la ingenuidad; fui subsecretario y sé cómo

pueden usarse ciertas herramientas para beneficiar o perjudicar a determinadas instituciones. Sin entrar aún en tecnicismos, hoy la regulación de aranceles está afectando especialmente a las universidades privadas que están en la gratuidad. Y, por otro lado, el FES perjudica principalmente a aquellas que no forman parte de ese sistema. Desde esa perspectiva, para mí no hay dos lecturas posibles. Además, lo digo con claridad: este Gobierno tiene el corazón puesto en las universidades estatales y tradicionales. Me consta que en este Gobierno las universidades privadas no son vistas con buenos ojos.

—¿A qué lo atribuyes?

—Aquí hay un componente ideológico muy evidente. Hay ciertos proyectos educativos, vinculados a algunas universidades, que simplemente no les gustan. Consideran que algunos, tal vez, son demasiado elitistas. Pero, en el fondo, lo que realmente falta es una verdadera conciencia del rol que cumplimos las universidades privadas; representamos más de la mitad de la matrícula del subsistema universitario. Y frente a eso, me levanto y me rebelo. No tengo problema con que tengan el corazón puesto en otro modelo. De hecho, si uno mira los números, las universidades tradicionales reciben un aporte basal directo del Estado cercano a los 500 mil millones de pesos al año, ni siquiera reclamo contra eso. Lo que sí cuestiono es que, con los recursos disponibles hoy, se es-

tén redistribuyendo fondos desde las universidades privadas —que no recibimos una cuota basal, pero sí hacemos un aporte enorme al sistema— hacia instituciones que ya cuentan con financiamiento suficiente. Eso, a mi juicio, es una paradoja.

—Algunos señalan que el Estado debería aportar más a las instituciones públicas.

—Mi posición es clara: no creo que al país le haga bien seguir incrementando ese gasto. Pero lo que realmente me indigna es que, con los recursos actuales, se termine afectando a las universidades privadas, especialmente a través de los aranceles regulados. Y más aún, que el FES establezca por ley que no se puedan cobrar copagos adicionales a los estudiantes o a sus familias. En la práctica, eso significa cerrar la puerta al financiamiento privado en educación superior.

—Desde la Corporación de Universidades Privadas, ¿no se han sentido acogidos en este debate por el ministro Nicolás Cataldo y el subsecretario Víctor Orellana?

—Te pongo un ejemplo: cuando se discuten políticas públicas, automáticamente se escucha al subsecretario decir: “Me voy a sentar con las universidades del CRUCH a conversar.” ¿Tú crees que las universidades privadas somos tenidas en cuenta para participar en esa discusión de políticas públi-



cas? Para nada. En el Gobierno anterior creamos algo inédito: un consejo asesor para la educación superior. Queríamos que todas las instituciones del sistema tuvieran un espacio de encuentro, un lugar donde, al menos una vez al año o al semestre, pudieran dialogar con la autoridad. Pues bien, ¿qué hizo este Gobierno? Al poco tiempo más asumir, eliminó ese consejo asesor. Así, sin más, sin dar ninguna razón. Y eso, para mí, es una pésima señal.

—¿Pero me imagino que alguna vez se han reunido con las autoridades?

—Han existido reuniones con el ministerio, pero han sido más bien de carácter protocolar. Y ese acercamiento tiene más que ver con una conveniencia coyuntural. Tanto así, que el propio subsecretario lo reconoció: “Sé que no tengo los votos en el Senado para aprobar el proyecto del FES, por eso quiero conversar con ustedes”. Entonces, cuando tú supeditas el diálogo al hecho de no tener los votos, eso no es genuino, no hay un verdadero espíritu dialogante. En términos más técnicos, por ejemplo, en las reuniones sobre los avances en la nueva regulación de aranceles, los vicerrectores económicos que asistieron contaban que no había espacio para intercambiar ideas. Eran simplemente reuniones informativas: llegaba el subsecretario y decía “esto es lo que hay”. No había un “¿qué piensan ustedes?, ¿cómo se podría mejorar esto?”. Eso no es diálogo.

—¿Qué parte del proyecto FES te parece rescatable?

—Hay consenso en que el CAE debe ser reemplazado por otro sistema de financiamiento. Y toda la parte del proyecto FES que tiene que ver con la condonación parcial, con la reprogramación de las deudas estudiantiles, me parece bien. Puede haber matices o ajustes técnicos, pero en general está bien diseñado. Personalmente no tendría problema en que esa parte se tramitara por separado. De hecho, si así fuera, cuentan con nuestro apoyo. No votamos, ni hacemos *lobby*, pero públicamente no tendría ninguna crítica de fondo.

—¿Y lo que más te preocupa?

—El problema está en el nuevo sistema de financiamiento que se propone. Y esto va más allá de mi universidad: tiene efectos sobre ella, sin duda, pero también sobre todo el sistema. Todavía tengo muy presente mi experiencia como subsecretario, y por eso me preocupa el sistema en su conjunto. No estoy aquí peleando por los recursos de mi universidad, lo que defiende es la posibilidad de ofrecer proyectos educativos de calidad para nuestros jóvenes. Y con este proyecto, tal como está planteado, eso está en riesgo. De hecho, en un seminario que hicimos el año pasado, cuando vino el subsecretario, le dije: “Le apuesto un almuerzo a que en diez años más, si este proyecto se aprueba tal como está, vamos a tener un peor sistema de educación superior”.

“Quizás hemos sido demasiado dóciles”

—¿Eres autocrítico respecto de cómo se administran los recursos al inte-

rior de las universidades? Porque, si bien en Chile se gasta en educación superior por sobre el promedio de la OCDE, tú mismo has dicho que “las universidades tendrán que saber manejar de mejor manera un presupuesto más contenido”.

—Siempre se puede ser más eficiente. Pero créeme que en las universidades privadas hacemos verdaderas maravillas con los recursos que tenemos. ¿Se puede mejorar? Sin duda. Pero si hablamos de ineficiencia, hay otras instituciones donde el problema es mucho más evidente. Basta con mirar ciertos indicadores, como la relación entre funcionarios y académicos en algunas universidades tradicionales. Los casos recientes de la Universidad de la Frontera o la Universidad Austral, por ejemplo, hablan por sí solos. En universidades con una situación patrimonial sólida, con buenos ingresos, pero que simplemente han hecho una mala gestión. Entonces, cuando se habla de eficiencia en el sistema, creo que la conversación no puede centrarse solo en las universidades privadas. Los problemas de gestión están, principalmente, en otras partes. Lo que sí me parece inaceptable es que, con los recursos que ya existen, se tome la decisión de quitarle a unas universidades para entregarle a otras. Eso no es razonable ni justo. Y además, va en contra del principio de diversidad institucional que promueve nuestra propia legislación.

—¿Cómo traspasa esta preocupación, que es muy técnica, una familia común y corriente? Porque este es un debate serio, pero difícil para el ciudadano común.

—En relación al FES, le preguntaría directamente al estudiante: “¿Estarías dispuesto a aportar algún recurso propio si eso te permite acceder a una mejor formación o a una educación de mayor calidad, que además reduce en mejores oportunidades para ti más adelante?”. Como universidad podemos hacer mucho más por los estudiantes si no se nos cierra esa llave de financiamiento. Cuando se nos limita esa posibilidad de recibir algún aporte adicional —aunque sea mínimo— se restringe también nuestra capacidad de innovar, de invertir en infraestructura, en investigación o en atraer buenos docentes. Lo segundo que les diría es: “Cuidado, mucho cuidado”. Porque lo que hoy parece gratuito, puede terminar costando mucho más en el futuro. Si estudias cinco años bajo este sistema, tendrás que devolver durante 20 años el 8% de tu ingreso. Así de claro. Da lo mismo si ese 8% termina siendo una, dos o incluso cinco veces más que lo que el Estado invirtió originalmente en tu formación. Lo pagarás igual. Eso es un impuesto agregado. A los estudiantes también se los plantearía así: “¿Qué prefieres? ¿Un sistema de crédito que solo te cobra lo que efectivamente el Estado invirtió en ti? ¿O uno que, independientemente de cómo te vaya en el futuro, te obligue a pagar un porcentaje fijo por años, incluso si terminas devolviendo

mucho más?”.

—El 67% de los alumnos de la Finis Terrae estudia con gratuidad, con esta posible reforma ¿se están cuestionando seguir adscritos?

—Es un tema que siempre tengo en mente, y al cual no me cierro a priori. Hoy por hoy no es algo que estemos considerando seriamente, pero soy realista: dado el alto porcentaje de estudiantes que tenemos con gratuidad, una eventual salida podría implicar un desmedro importante en términos de admisión. Dicho eso, tampoco descarto esa posibilidad. Porque si, producto de esta redefinición de aranceles regulados, el monto que el Estado nos traspasa por estudiante hiciera inviable o insostenible un proyecto educativo de calidad —como el que queremos ofrecer—, no tendría problema en plantear abiertamente nuestra salida de la gratuidad.

—¿Crees que la Finis Terrae cometió un error al adscribirse a la gratuidad?

—(Se queda en silencio durante un rato) Creo que, al momento de tomar la decisión, no se dimensionaron del todo las repercusiones que tendría en términos de las transferencias que comenzarían a provenir del Estado. Si se hubiera tenido plena claridad sobre lo que esto implicaría —especialmente en cuanto a la dependencia financiera y a la sensibilidad frente a los aportes estatales—, probablemente la decisión se habría evaluado con más cautela. Incluso, puede que el resultado hubiese sido otro. Es difícil emitir un juicio definitivo hoy, considerando que en ese momento los antecedentes eran distintos o, simplemente, no estaban del todo disponibles.

—El tema de la autonomía universitaria es especialmente sensible en ciertos proyectos educativos, como el de ustedes, que tienen una identidad muy definida. En su caso, por ejemplo, existe una asociación con los Legionarios de Cristo desde 1999. ¿Cómo abordan internamente este tema?

—Sin duda lo vemos con preocupación. Porque, más allá de que exista una declaración explícita de que no hay intención de intervenir en los proyectos educativos, hay un factor práctico que no se puede ignorar: cuando una universidad depende casi completamente de los recursos del Estado, es inevitable —aunque sea de forma inconsciente— que termine cuidando no incomodar a la autoridad de turno. En general, las universidades privadas hemos sido muy abiertas en colaborar con las autoridades, sin importar el color político. Pero quizás, en ese intento por ser parte de las soluciones, hemos sido demasiado dóciles. Y me preocupa que, a medida que esa dependencia del financiamiento estatal crece, esa docilidad termine convirtiéndose en servilismo. Eso es muy peligroso, porque precisamente el rol de una universidad es ser un espacio de pensamiento libre, donde haya lugar para la discrepancia, para el debate de ideas, para opinar sin temor. Eso no se puede perder.



Aquí hay un componente ideológico muy evidente. Hay ciertos proyectos educativos, vinculados a algunas universidades, que a este Gobierno simplemente no les gustan”.



¿Tú crees que las universidades privadas somos tenidas en cuenta para participar en esta discusión de políticas públicas? Para nada”.